

108

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO

CIRCUITO DE BOGOTA

SECCIÓN SEGUNDA

PROCESO EJECUTIVO 2018-00252

Bogotá D.C., **22 FEB. 2019** de dos mil diecinueve (2019)

Ingresa el presente proceso interpuesto por la señora MYRIAM TERESA PRIETO DE CUINTACO, en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP, con recurso de reposición presentado por el apoderado de la entidad ejecutada el 29 de agosto de 2018 (fls. 60 al 66), contra el auto que libra mandamiento ejecutivo de pago.

I. DEL RECURSO PRESENTADO:

El apoderado judicial de la entidad ejecutada mediante escrito del 29 de agosto de 2018 (fls. 60 al 66), presenta recurso de reposición contra el auto que libra mandamiento ejecutivo de pago, en los siguientes términos:

Presenta las siguientes excepciones previas que denomina como (i) **falta de legitimación en la causa por pasiva**, (ii) **inexistencia del título ejecutivo** y (iii) **caducidad de la acción**, las cuales si bien no se encuentran taxativamente regladas por el artículo 97 del C.G del P, proceden de conformidad con el párrafo segundo del artículo 430 del C.G del P, toda vez que éstas atacan los requisitos formales del título ejecutivo.

Excepciones que se entraran a estudiar a continuación:

Sustenta la **falta de legitimación en la causa por pasiva** de la siguiente manera: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 párrafo segundo, artículo 26 y artículo 35 del Decreto 254 de 2000, la UGPP carece



109

de competencia para reconocer y pagar los intereses moratorios de que trata el artículo 177 del C.C.A., ordenados mediante fallos judiciales debidamente ejecutoriados, en donde CAJANAL en liquidación es la entidad condenada a dicho pago, razón por la cual este tipo de reclamaciones deben continuar siendo atendidas por los patrimonios autónomos que se constituyeron para tal fin o por parte de la entidad que asuma dichos pasivos.

Respecto a la **inexistencia del título ejecutivo** indica la entidad que los intereses moratorios que pretende la parte actora deben regirse de acuerdo a lo estipulado en el artículo 192 de la ley 1427 de 2011; de manera que la ejecutante no tiene derecho por cuanto dicho artículo preceptúa que cumplidos tres meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud; adicionalmente indica que no solo basta con la presentación de la solicitud antes mencionada sino que también se debe allegar la documentación exigida y entre dicha documentación no se encuentra la declaración juramentada de que no se ha iniciado proceso ejecutivo, la cual no fue aportado por la parte demandante.

Por último la parte ejecutada propone la excepción de **caducidad de la acción** la cual la expone en los siguientes términos: Manifiesta que la demanda fue interpuesta en vigencia de la Ley 1437 de 2011 que establece en el inciso segundo del artículo 299 el termino de 10 meses después de la ejecutoria de la sentencia para que el título sea ejecutable. Si la demanda ejecutiva fue presentada con posterioridad al 1 de julio de 2015 se presentó el fenómeno jurídico de la caducidad. Como consecuencia a lo anterior es enfática en resaltar la entidad que si el título base de la ejecución cobró ejecutoria el 14 de febrero de 2008 y el proceso ejecutivo, según página Rama Judicial es de 26 de junio de 2018, se produjo el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción ejecutiva en el caso de la actora y por tanto la extinción del derecho de acción por el paso del tiempo, como quiera que la ejecutante dejó transcurrir los plazos fijados por la Ley en forma objetiva.



110

II. TRAMITE.

La Secretaría del Despacho fijo en lista el recurso por un día (fol. 106) y corrió el traslado a la parte demandada por tres días, sin pronunciamiento alguno.

III. CONSIDERACIONES.

El recurso de reposición presentado por la entidad ejecutada gira en torno al mandamiento de pago librado por este Despacho el 13 de julio de 2018, así el Despacho entrará a pronunciarse sobre los puntos en que el recurrente presenta inconformidad de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 430 del C.G del P.:

a. Falta de legitimación en la causa.

Aduce la entidad en su escrito que la UGPP no es la encargada del pago de los intereses de mora y de las eventuales sumas que por concepto de mesadas pensionales se le adeuden a la demandante, toda vez que según su razonamiento, dicho pago debe ser cancelado con cargo de CAJANAL, sustentando de esta manera la **excepción de falta de legitimación en la causa.**

Frente a tal situación, basta indicar que las apreciaciones hechas en el recurso se desvanecen con la Ley 1157 de 2007, que en su artículo 156 creó la Unidad Ejecutada y, donde se dispuso lo siguiente:

“Artículo 156. Gestión de Obligaciones Pensionales y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Corregido por el art. 1, Decreto Nacional 1193 de 2012. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta Unidad Administrativa tendrá a su cargo:

- i) *El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de*



JMM

Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003;"
(Negrillas y subrayas fuera de texto)

A su turno el Decreto 169 de 2008 indicó:

"Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones:

A. En cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones económicas

1. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su cesación de actividades como administradoras; así como el de aquellos servidores públicos que hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para acceder a su reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con anterioridad a su cesación de actividades como administradoras. De igual manera, le corresponderá la administración de los derechos y prestaciones que reconocieron las mencionadas administradoras y los que reconozca la Unidad en virtud de este numeral.

2. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando. También le compete la administración de los derechos y prestaciones que las mencionadas entidades hayan reconocido y los que reconozca la UGPP en virtud de este numeral."

Por su parte, el Decreto 4107 de 2011 estableció:

"Artículo 64. Continuidad de actividades de Cajanal EICE en liquidación. Cajanal EICE en liquidación continuará realizando las actividades de que trata el artículo 3° del Decreto 2196 de 2009 hasta tanto estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la



112

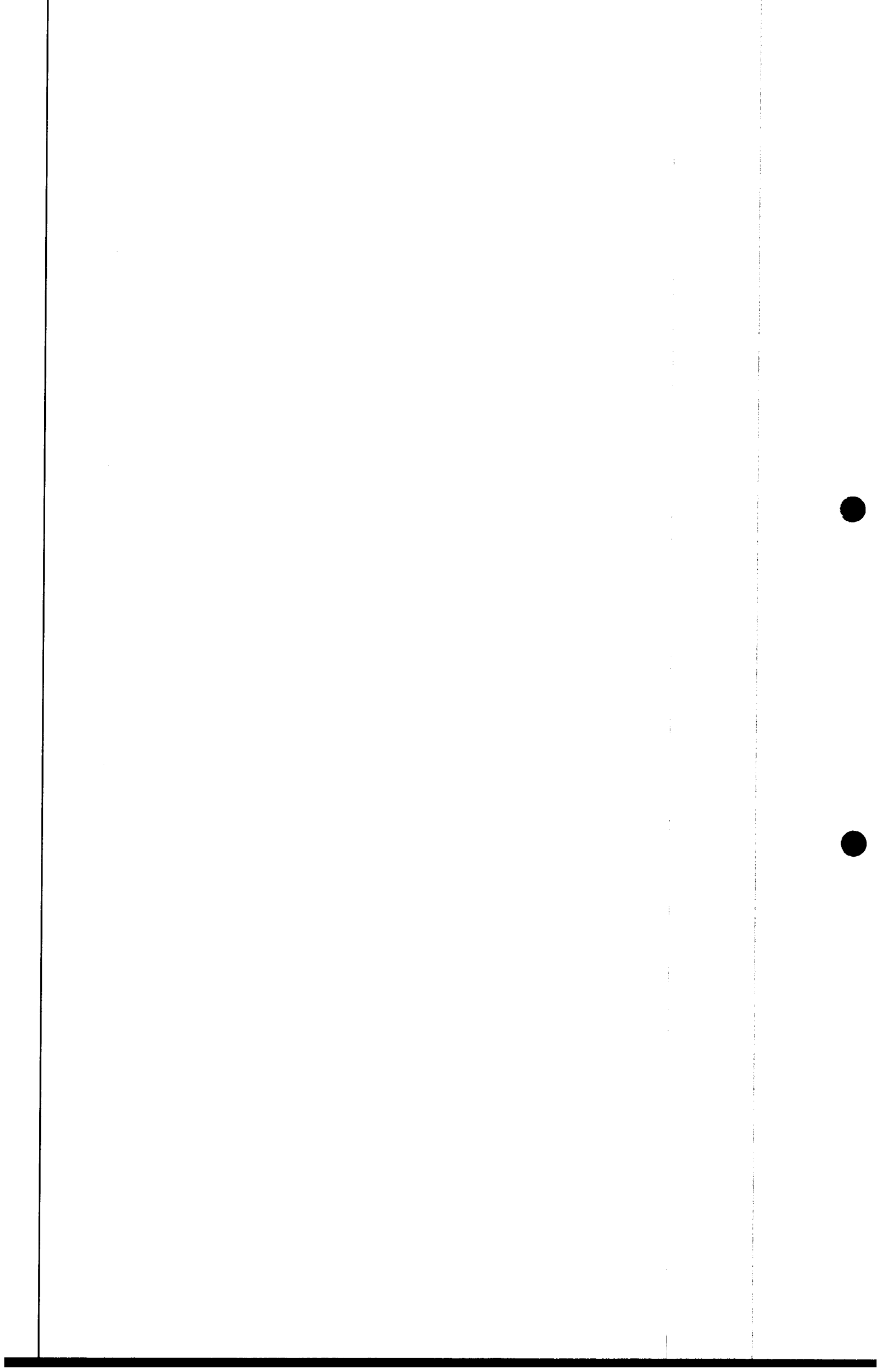
Protección Social, UGPP, a más tardar el 1° de diciembre de 2012. Para garantizar la continuidad de los procesos que le deben ser transferidos de acuerdo con lo previsto en el artículo 1° del Decreto 2040 de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, efectuará especial seguimiento a los contratos de administración u operación suscritos o que suscriba Cajanal EICE para desarrollar las actividades del artículo 3° del Decreto 2196 de 2009.” (Negrillas y Subrayas fuera de texto)

Así las cosas y, de acuerdo a la normatividad transcrita, es a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a quien le corresponde el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas causadas a cargo de administradoras del régimen de Prima Media con Prestación Definida respecto a las cuales se haya decretado su liquidación.

Ahora bien, el proceso de liquidación de CAJANAL EICE iniciado a través del Decreto 2196 de 2009, culminó el pasado 11 de junio de 2013, fecha límite establecida en la última prórroga otorgada a dicho proceso por medio del Decreto 877 de 2013, luego a partir del **12 de junio de 2013** la misma desapareció de la vida jurídica habiendo sido sustituida en virtud de la normatividad reseñada, por la Unidad ejecutada.

En cuanto a la resolución del Conflicto de Competencias Administrativas dirimido por el Consejo de Estado en providencia de data 02 de octubre del año 2014, una vez analizado el mismo, el despacho estima que se trata de supuestos de hecho diferentes en tanto en el caso puesto en conocimiento de la Alta Corporación, el reconocimiento de la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2011, fue asumido por la UGPP, quien no obstante, se negó al pago de los intereses moratorios. En el caso que nos ocupa, el reconocimiento fue hecho por Cajanal EICE en liquidación, quien realizó el reconocimiento de lo que creyó deber, omitiendo el pago de los intereses moratorios los cuales se encontraban debidamente causados.

Ahora bien, si como lo dice el Consejo de Estado en el pronunciamiento anterior, el pago ordenado en la sentencia no se puede escindir, menester es



113

concluir que tanto el reconocimiento de la reliquidación – función misional – como el pago de intereses moratorios, costas y demás, corresponden a una misma entidad, y en dicho sentido, habiendo desaparecido de la vida jurídica quien podía responder por el pago, **quien debe responder ahora no es otra que la entidad que la ha sustituido en la función misional.**

Y es que para el despacho el pago de la reliquidación ordenada así como de los intereses moratorios, la indexación y demás, forman parte de las actividades misionales tanto de la extinta Cajanal como de su ahora sustituta UGPP y su reconocimiento sigue la suerte de lo principal tal y como lo afirmó el Consejo de Estado en el concepto que es traído a colación.

b. Inexistencia del título ejecutivo

Frente a la excepción que la entidad denominó **Inexistencia del título ejecutivo**, el apoderado judicial de la UGPP considera que la parte actora no aportó la documentación exigida en el artículo 177 del C.C.A., por lo que no se causó interés moratorio alguno; sobre este particular, se advierte que el 11 de julio de 2018 (FI.23 Vto.), quedó debidamente ejecutoriada la sentencia proferida dentro del expediente 2005-09296, por lo que el vencimiento del plazo contenido en el artículo 177 del C.C.A., (6 meses) se cumplió el 11 de enero de 2009, sin que a dicha fecha se hubiese elevado por el accionante solicitud alguna, razón por la cual el 11 de enero de 2009, cesa el pago de intereses moratorios; no obstante lo anterior, se tiene demostrado que con fecha 07 de mayo de 2009, la parte actora elevó solicitud de cumplimiento a fallo (FI. 24 al 25), con lo cual a partir de esta fecha se reanuda la generación de intereses moratorios hasta el pago de la sentencia.

c. Caducidad de la acción.

Señala el apoderado de la entidad ejecutada que se extinguió el derecho de acción por cuanto transcurrió el tiempo objetivamente estipulado en la norma para radicar la presente controversia. Al respecto, advierte el Despacho que en el caso que nos atañe no ha operado el fenómeno de la



caducidad en razón a que la demanda ejecutiva fue radicada dentro de los 5 años previstos en el numeral 11 del artículo 136 del C.C.A., como se verifica a continuación:

- La ejecutoria de la sentencia dictada, ocurrió el 11 de julio de 2008 (fol. 23 Vto.).
- La acción ejecutiva fue radicada el 26 de junio de 2018.

Ahora bien, el honorable Consejo de Estado, máxima autoridad de lo Contencioso Administrativo en varias oportunidades entre ellas en pronunciamiento efectuado dentro del expediente con radicado interno 5042-2015 de fecha 29 de marzo de 2016, M.P. Dra. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ; radicado interno 1777-2015 del 25 de agosto de 2015, M.P. Dr. JOSE OCTAVIO RAMIREZ; y radicado interno 3637-2014 del 30 de junio de 2016, M.P. Dr. WILLIAM HERNANDEZ GÓMEZ, ha considerado que en "Virtud del Decreto 2196 de 2009 y la Ley 550 de 1999, los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la entidad liquidada **fueron suspendidos desde el 12 de junio de 2009 hasta su conclusión, que tuvo lugar el 11 de junio de 2013**, esto es, por el espacio de cuatro (4) años", criterio que debe ser acogido por este Despacho Judicial.

Conforme a lo anterior, la fecha de ejecutoria de la sentencia data del 11 de julio del 2008, a partir de esa fecha la entidad contaba con 18 meses para dar cumplimiento al fallo de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 4º del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo; sin embargo, los términos fueron suspendidos entre el 12 de junio de 2009, hasta el 11 de junio de 2013, como fue establecido por el Consejo de Estado, de manera que los 18 meses se vencieron el 11 de enero de 2014 y a partir de esa fecha, contaba el ejecutante con 5 años para radicar la acción y como la misma fue interpuesta el 26 de junio de 2018, no es posible afirmar que operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

Las anteriores consideraciones, son suficientes para no reponer el auto que antecede y se ordenará que una vez en firme esta providencia ingrese nuevamente el proceso al Despacho para lo correspondiente.



MS

IV. DECISIÓN.

PRIMERO: No reponer el auto de 13 de julio de 2018 de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: Se reconoce y se tiene a la Doctora DIANA CAROLINA RINCON AVILA, identificada con la C.C. 1.010.182.865 de Bogotá y T.P. 235.222 del C.S.J., como apoderado judicial de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP, en los términos y para los efectos del memorial escritura poder visible a folios 67 al 89 del expediente, de la misma manera se reconoce como apoderado sustituto al Doctor LUIS JAVIER AMAYA URBANO, identificado con la C.C.1.022.342.266 y T.P. 259.224 del C.S.J.

TERCERO: En firme este auto, ingrese nuevamente el expediente para lo correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

cd

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCION SEGUNDA

EL AUTO ANTERIOR SE NOTIFICA A LAS PARTES EN ESTADO ELECTRONICO
No. 13, A TRAVES DE LA PAGINA WEB WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO, HOY
A.M. 25 FEB. 2019 DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), A LAS 8:00


SECRETARIO